

TRASQUILA

DESPEGAR DE ATENCO

Héctor Castillo Juárez

La fragilidad de la estabilidad política que vive nuestro país es mayor de lo que muchos pudieran suponer. Los hechos ocurridos en San Salvador Atenco desde la semana pasada han hecho evidente que la falta de sensibilidad política de los gobiernos federal y del Estado de México y la desesperación de los ejidatarios afectados, constituyen la mezcla perfecta para la generación de conflictos graves.

Afortunadamente la oportuna intervención del secretario de Gobernación, Santiago Creel, pudo distender rápido, aunque sólo parcialmente, el problema. Pero evitó el derramamiento de más sangre. Ya hay, es necesario resaltarlo, heridos graves. Y aunque la razón les asiste a los ejidatarios, ello no les autoriza —para nada— a cometer actos de violencia de ninguna índole. Por ese camino sólo irán perdiendo paulatinamente el respaldo social que han ido conquistando, y conseguirán acercar a sus causas a grupos oportunistas y radicales, ávidos de reflectores. Recordemos el ejemplo tristemente célebre de la lucha que paralizó a la UNAM por un año.

Es importante resaltar que por el momento, una vez desatado el conflicto que el gobierno federal provocó, éste ha actuado con responsabilidad y ha cumplido la demanda de liberación de los líderes ejidatarios presos. En contraparte, hasta el momento de escribir estas líneas, los rehenes de los ejidatarios no han sido puestos en libertad. Para mostrar al gobierno que hay disposición a la negociación política, los líderes de Atenco harían muy bien si liberan a los funcionarios y ciudadanos secuestrados. La presión pueden ejercerla por métodos pacíficos.

Los ejidatarios del municipio de Atenco han manifestado que no desean vender sus tierras. Lo cierto es que nadie en su sano juicio desearía vender sus propiedades a ese precio fijado unilateralmente por el gobierno y mucho menos por la fuerza. Ello es en gran medida el origen del conflicto. Un precio atractivo que impactase el costo que tendrá la inversión aeroportuaria de manera justa (y no sólo en menos del 0.20 por ciento como ocurre) podría ayudar a destrabarlo. Un gobierno de empresarios como el actual podría convertir a los ejidatarios en accionistas importantes del aeropuerto (copropietarios) y en futuros millonarios, lo que sin duda aceptarían. Otra opción sería el entregar a los ejidatarios dos hectáreas de igual o mejor calidad que la expropiada, por cada hectárea cedida, que se podría acompañar de un crédito para la producción de igual valor (catastral) a la tierra expropiada.

Sin duda que llegar a una solución inteligente y satisfactoria para todas las partes no será un asunto fácil. Son ya muchos los intereses involucrados: políticos y económicos. Es relativamente simple prever que el justo movimiento de los campesinos de Atenco se irá contaminando de supuestos solidarios con la

intención de convertir el asunto en uno de carácter político para cosechar en el 2003. La restauración del PRI en el poder podría llegar en el 2006 de manera más fácil si el gobierno no interpreta adecuadamente las señales y las tierras de Atenco se incendian.

Existen muy pocas salidas al ya delicado problema de Atenco. La búsqueda de alternativas de construcción del aeropuerto en los estados de Morelos, Puebla e Hidalgo podrían llevar estas propuestas y otras a escenarios menos turbios. Tal vez la solución está en atreverse ya a despegar de Atenco y volver a empezar. Antes de que sea tarde.

Para el diario La Crónica de Hoy de Julio 16 de 2002.

Comentarios a: trasquila@hectorcastillo.org